

Opinión**Pilares de la prevención de violencia en ruinas****Manfredo Marroquín**

En repetidas ocasiones se oye decir en distintos foros internacionales que el triángulo norte de Centroamérica es la zona más violenta del mundo entre otras razones por la alta tasa de homicidios que todavía afecta a estos países y cuyas raíces se encuentran entre otros factores, en la prevalencia de un estado de impunidad generalizado.

En la Cumbre de las Américas fueron varios mandatarios los que hicieron alusión a esta alarmante realidad que se combina además con estar inscritos en la región más desigual del mundo.

Esta violencia que afecta principalmente a la población joven y de mujeres, de las grandes urbes latinoamericanas que vive en barrios populares, donde el control territorial lo tienen ganado al Estado bandas delictivas que imponen su ley por medio de la extorsión, la amenaza y el asesinato, se traduce en al menos 15 mil muertes violentas por año en los tres países, que representan un 15 por ciento del total de toda la región en un espacio territorial que no llega a alcanzar ni el uno por ciento del territorio latinoamericano.

De hecho la última encuesta de Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) del 2014 registra un incremento del porcentaje de victimización precisamente en las áreas urbanas de Guatemala, donde un 32.7 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de agresión delictiva. A ello hay que agregar que de acuerdo con esa misma fuente, la tercera parte de los guatemaltecos asegura que su barrio está afectado por la presencia criminal de pandillas.

Desafortunadamente ninguno de los tres países puede mostrar casos exitosos de prevención de la violencia de impacto nacional, cosa que no es extraña cuando se examina a dónde se siguen asignando los escasos recursos públicos de los tres Estados.

Detener esta ola de violencia solo será posible hasta que se priorice el gasto y recursos especializados en tres instituciones clave: familia, escuela y ciudad.

La familia es quizás el tema más complejo pues intervienen muchos factores pero en materia de prevención interesa abordar asuntos como integración del núcleo familiar, asistencia escolar de los menores y jóvenes, ingreso familiar, entorno barrial, etcétera. La tarea se hace aún más compleja cuando vivimos en un país sin registros ni estadísticas confiables sobre variables para medir el estado de la situación de las familias guatemaltecas, mucho menos medir progresos o retrocesos.

La escuela que debería ser un bien público garantizado para todos los niños y guatemaltecas en pleno siglo XXI, aún enfrenta desafíos básicos superados por otros países hace más de cien años, como ausencia de cobertura, precaria infraestructura y baja calidad educativa. Esto sin tomar en cuenta que la materia prima objeto de la educación padece males estructurales como desnutrición crónica en hasta el 50 por ciento de los casos en niños menores de cinco años.

Las ciudades como espacio territorial donde confluyen grandes mayorías de población siguen siendo administradas pobremente sin ordenamiento, con presupuestos exiguos que ni siquiera alcanzan a cubrir la prestación de servicios básicos como suministro de agua potable, recolección de desechos, y transporte público, siendo muchas de ellas además, presas de la corrupción.

Perder estas tres instituciones (familia, escuela y ciudad) tiene además de un costo directo en reproducir los niveles de violencia un efecto devastador en la psicología social del individuo que llega a perder toda fe o creencia en la democracia como también se constata en la encuesta de LAPOP, donde Guatemala aparece en el último lugar de toda América en apoyo al sistema democrático. No nos extrañe entonces que un buen día de estos se caiga el poco repollo que le queda al sistema.